

Principales cambios y problemas actuales de la vida política en México

Algunos hechos de nuestra historia política

EN ESTE apartado nos centramos en los cambios, la situación actual y algunas proyecciones del proceso político mexicano. No obstante es difícil entender el México contemporáneo sin reparar así sea esquemática y brevemente, en aspectos históricos fundamentales de su siglo xx.

La Revolución mexicana y el cardenismo constituyen dos momentos muy importantes de nuestra historia. No son, por cierto, meros antecedentes de la vida política actual, sino procesos históricos que de diferentes maneras todavía inciden contradictoriamente en lo que acontece en nuestros días.

La Revolución de 1910-1917 culmina con la construcción del Estado moderno mexicano. Nuevas fuerzas, conforme a una renovada y distinta correlación política, asumen la dirección del Estado. Y en un sentido histórico profundo, la emergente burguesía mexicana, que desde décadas atrás detenta el poder, una vez consumado el proceso revolucionario se consolida como la fuerza económica, social, política e ideológica hegemónica y más poderosa.

Las nuevas instituciones pretenden impulsar un nuevo tipo de desarrollo capitalista, superior al que vive México después de la Reforma, bajo el porfiriato. Y a pesar de que se registran importantes cambios, muchos en un sentido progresista –como la creación de un sistema de educación pública, el inicio del reparto agrario, el establecimiento de una regulación laboral y la creación de un nuevo régimen institucional, en ciertos aspectos favorable a los trabajadores–, no se superan el atraso y el subdesarrollo.

Políticamente el Estado emanado de la revolución no logra en sus primeros años de vida la estabilidad suficiente para dar continuidad y perspectiva al proceso en marcha, que requiere la transmisión pacífica del gobierno. Con esa finalidad, en 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario (PNR), con el que los cambios de gobiernos, federal, estatales y municipales, tenderán a resolverse cada vez más por la negociación política, y no por vía del enfrentamiento armado.

Años más tarde el cardenismo realiza las más profundas reformas posrevolucionarias y con ellas el proceso democrático más importante en el siglo XX, que intenta corregir las dramáticas desigualdades sociales, mejorar las condiciones de vida del pueblo y sentar las bases de un desarrollo nacional soberano. La sustitución entonces del PNR por el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), se vincula al intento posrevolucionario más serio por construir una organización capaz de defender los logros alcanzados y encabezar una profundización nacionalista revolucionaria del proceso.

Ante la proyección revolucionaria de entonces, la clase en el poder reacciona y una de sus fracciones más conservadoras crea el Partido Acción Nacional (PAN) y otras organizaciones contrarias a la educación pública laica, a la reforma agraria y al sindicalismo y los derechos de los trabajadores. En ese contradictorio ambiente la fracción dominante de la burguesía se impone políticamente. Y los gobiernos posteriores, en la práctica, darán media vuelta a la derecha —empezando por el de Manuel Ávila Camacho—, para iniciar un camino en muchos sentidos no sólo distinto sino a menudo inverso al cardenista.

La sustitución en 1945 del PRM por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es reveladora de que la correlación de fuerzas dentro del Estado se vuelve, a partir de entonces, cada día más desfavorable para quienes pretenden cambios en un sentido progresista.

De los gobiernos posrevolucionarios hasta los años ochenta, es sobre todo el de Miguel Alemán —campeón de la corrupción, de la represión al movimiento obrero y al campesinado, del apoyo a los nuevos latifundistas y del entreguismo hacia los Estados Unidos—, el que representa intereses reaccionarios, y entre ellos a ciertas poderosas corrientes de la burguesía interesadas en desmontar gran parte de las reformas cardenistas, lo que en cierta forma lograrán, no sin la resistencia de segmentos progresistas de los trabajadores, del campesinado, de otros grupos populares y de numerosos intelectuales.

Las décadas posteriores al cardenismo están llenas de cruentas luchas, de represión y férreo control del movimiento obrero y el campesinado, ello en una aparente paz social, estabilidad política y “unidad nacional” que acompañan a la prosperidad mundial de la posguerra, y que en nuestro país, según versiones oficiales y oficiosas se expresará en el “milagro mexicano”.

Durante los años cuarenta y cincuenta, a contrapelo del peso político que tienen en el cardenismo, los trabajadores y el campesinado, diversos segmentos sociales provenientes de la burguesía, de capas medias y de la pequeña burguesía se irán convirtiendo en la fuerza social dominante en el aparato del Estado y concretamente en el gobierno. Éstos adoptarán crecientemente una posición más alejada de los intereses populares y, de múltiples maneras se dejará sentir el peso, también cada vez mayor, de fuerzas conservadoras.

Las luchas reivindicativas obreras y campesinas que se despliegan incesantemente por cerca de tres lustros, culminan con los grandes movimientos magisterial, telegrafista, ferrocarrilero, tranviario y electricista de 1957, 1958, 1959 y 1960 por demandas principalmente económicas y por la democracia sindical y la independencia de los trabajadores. Y si bien no se logran las reivindicaciones demandadas sino que dichos movimientos democráticos son duramente reprimidos, no se sofocan del todo.

Los años sesenta son para el Estado mexicano de crecimiento económico, estabilidad política y “paz social”. Sin embargo, las luchas de la gente continúan y así también la represión. El asesinato del dirigente campesino Rubén Jaramillo es sólo una muestra del encono que adquiere la lucha social y de clases entonces.

En los primeros años de esa década diversos contingentes de obreros, campesinos, maestros, profesionistas, intelectuales y en menor escala estudiantes, en su mayor parte de izquierda, crean el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Este esfuerzo político organizativo que entre 1961 y 1965 logra atraer acerca de 300,000 mexicanos, en un país con una población entonces menor a 40 millones, representa, sin duda, una de las empresas más significativas por avanzar en la independencia del movimiento popular, en la defensa de la soberanía nacional y en el apoyo a las demandas de la gente. Y al recordar el MLN, debiera tenerse presente que al presidir unos meses antes la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, Lázaro Cárdenas fue sin duda uno de los mexicanos que más contribuyó a hacer posible ese avance.

Desafortunadamente el MLN desaparece después de varios años de intensos esfuerzos organizativos, en gran medida por los obstáculos interpuestos a su desarrollo por el gobierno de López Mateos, por la escasez de recursos y el bajo nivel organizativo, porque resulta difícil unir a fuerzas heterogéneas y contradictorias y por las prácticas antidemocráticas y viciosas de la izquierda tradicional, que a menudo pretende hacer del MLN un instrumento electoral subordinado a sus partidos.

Devenir de la crisis política

Las dificultades a las que se enfrentan las fuerzas progresistas una vez desaparecido el MLN no cancelan las luchas democráticas de diversos sectores sociales. Entre 1964 y 1967 los trabajadores de diversas empresas y del gobierno, particularmente los médicos y los estudiantes universitarios y normalistas en la ciudad de México y cada vez más en diferentes estados del país, llenan el escenario político con sus luchas.

En 1966 se produce en la UNAM un movimiento estudiantil que en sus inicios lucha de manera limitada contra el autoritarismo y la profunda antidemocracia que se expresa en la estructura institucional universitaria. Pero, a pocos días de que estalla la huelga estudiantil, su dirección: el Consejo Estudiantil Universitario –el CEU de entonces, indudable precursor político organizativo del CNH de 1968– articula un programa de lucha y levanta la demanda de una reforma universitaria que busca modificar los planes y programas y los órganos de gobierno de la Universidad Nacional. A partir de entonces, en 1966 y 1967 se avanza en la UNAM en un intento de renovación universitaria en el que participan numerosos profesores e investigadores, que permite modificar y actualizar planes y programas de estudio y conocer mejor la realidad nacional en la que se actúa.

Entre 1968 y 1971 el movimiento estudiantil cobra una presencia social y política de gran significación. Sus demandas recogen entonces algunas de la izquierda y de distintos movimientos sociales, principalmente en contra de la represión y por libertades democráticas conculcadas.

El movimiento estudiantil mexicano de 1968, si bien aflora en un momento casi mundial de rebelión juvenil, difiere en sus posiciones y proyecciones políticas de los que estallan entonces en los países capitalistas desarrollados de Europa y los Estados Unidos. De manera importante forma parte de la continuidad histórica de las luchas del pueblo mexicano, y a diferencia de aquéllos no pone el énfasis en posiciones “libertarias” individualistas y en problemas secundarios generacionales. De múltiples formas busca incorporar e incorporarse a las luchas de otros segmentos sociales, lo que a la postre no logra, o lo hace de manera muy limitada.

Pese a la simpatía y solidaridad que despierta en amplios segmentos de la sociedad, el movimiento estudiantil exhibe serias limitaciones y un explicable consustancial carácter impredecible. Pese a ello contribuye de distintas maneras a desbrozar el camino para ulteriores luchas democráticas de nuestro pueblo, y es por ello tal vez que se le reprime brutalmente el 2 de octubre de 1968, y el 10 de junio de 1971.

A partir de entonces el gobierno tiende a cambiar aspectos importantes de su quehacer político. Decide no actuar de la misma manera que durante las tres décadas previas, sin ni siquiera preocuparse por aparentar prácticas democráticas incluyentes y de respeto al ejercicio de ciertos derechos.

La línea política del gobierno de Luis Echeverría, sobre todo a partir de finales de 1971, en la que toma cuerpo una posición que tiende a atraer a los jóvenes y mediatizar a las fuerzas progresistas independientes, se conoce como “apertura democrática”. Junto a ella hay un acercamiento significativo, aunque

en ciertos aspectos retórico, al llamado Tercer Mundo, y la atención a ciertos asuntos sociales como el de la educación –la que crecerá cuantitativamente como no lo hacía desde décadas atrás, sobre todo a nivel medio y superior–, así como el mejoramiento relativo de la capacidad adquisitiva de los salarios, revela, entre otras cosas, la preocupación del régimen por una relativa pero importante pérdida de consenso en ciertas franjas sociales, sobre todo a partir de las represiones masivas de 1968 y 1971, la reactivación, en esos años, de luchas sociales diversas y el crecimiento de una nueva izquierda, que al margen de la tradicional, no resulta fácilmente sumable al partido oficial y al gobierno.

Son aquellos primeros años de la ya larga crisis el marco en el que surgirán nuevos alientos para las luchas democráticas. A partir de los años setenta cobra brío la lucha por la independencia del movimiento obrero. A pesar de las cruentas represiones, la defensa de las libertades democráticas no había sido ahogada, sino que más bien parecía brotar desigualmente en nuevos y diversos ámbitos sociales e incidía cada vez más en la vida política en ciertas ciudades y regiones del país.

En la década de los setenta se forman diversas nuevas agrupaciones políticas progresistas. Para miles de jóvenes interesados en la acción política la perspectiva de su militancia no se reduce única o principalmente a desplegar su práctica dentro del partido oficial, el gobierno en turno, los partidos oficiosos (PPS, PARM), o en la “oposición” de derecha principalmente: la conservadora y a menudo mojigata del PAN. Estos nuevos agrupamientos rebasan a la izquierda convencional que por años sobrevivía sin crecer ni penetrar prácticamente en ningún segmento social o región del país, y no pocas veces estaba subsidiada por el gobierno.

Como secuela de la represión al movimiento estudiantil y como signo de rechazo a los métodos gubernamentales de mediatización promovidos desde arriba a través de la “apertura democrática” echeverrista, grupos de jóvenes que no aceptan una participación política convencional, crean diversas pequeñas organizaciones que en cierto modo conforman, de manera muy contradictoria, un incipiente movimiento guerrillero urbano.

A diferencia de la “defensa armada” guerrerense de entonces, encabezada una por Genaro Vázquez Rojas y otra por Lucio Cabañas, que generan durante aquellos años gran expectación y participación más allá de la región en que actuaron, las organizaciones principalmente urbanas a las que nos referimos carecen de raíces históricas y de sustento popular. Son más bien organizaciones con diversas y frecuentemente contradictorias posiciones ideológicas y políticas. Y que si bien surgen como –y son a su vez– expresión de una realidad antide-mocrática plagada de injusticias, parecen no interesarse en su estudio y compren-

sión. Según algunos analistas de este fenómeno político social, ello contribuye a su desaparición, junto a la guerra ilegal, sucia y oculta lanzada por ciertos cuerpos represivos del Estado, que habrá de dejar un cruento saldo de centenares de jóvenes asesinados y desaparecidos.

Para 1975 el gobierno de Echeverría había logrado ciertos avances en sus posiciones entre varios segmentos sociales y parecía estar en mejores condiciones políticas que al arranque del sexenio. Sin embargo, el costo político de acciones, como la expropiación de bosques de Chihuahua y de algunos latifundistas del valle del Yaqui, Sonora, así como las discrepancias con ciertos grupos empresariales norteros, particularmente regiomontanos, le restan apoyo de segmentos importantes de la burguesía, lo que hace caer la imagen que la propia clase en el poder y desde luego todo el aparato del Estado y los medios de información le habían forjado.

En esas condiciones el PAN decide retirarse de las elecciones presidenciales y hacer un vacío en el espacio político que el régimen había creado décadas atrás para la participación de una "leal oposición" de derecha. Por primera vez un candidato del partido oficial va solo a los comicios con el simbólico apoyo del PPS y del PARM. Obviamente, el candidato del PRI "triumfa", pero el sistema electoral había entrado en crisis, si bien no franca ni definitiva, sí reveladora de una crisis política poco perceptible entonces, pero presente ya en la sociedad mexicana.

Dicha crisis se expresa en el autoritarismo oficial, revelador entonces de un desgaste de los métodos tradicionales para lograr el consenso; en la presencia de importantes contradicciones interburguesas, particularmente de ciertas poderosas fracciones de la burguesía y aun de la oligarquía monopolista con segmentos de la alta burocracia burguesa y, en la reanimación, en esa década de los setenta, de la contradicción nación-imperialismo, que en el México de entonces no es ya meramente externa sino también interna, en virtud del peso creciente del capital monopolista y del alto grado de dependencia estructural que padece el país.

Lo anterior, aunado al hecho de que el movimiento obrero y otros contingentes sociales despliegan entonces luchas importantes al margen del control oficial y ciertas corrientes de la izquierda ganan en independencia y crecen, convencen al gobierno de López Portillo de realizar una reforma política en 1977, con la finalidad de evitar la confluencia de diversas fuerzas democráticas en un movimiento popular que permitiera abrir nuevos cauces de acción política independiente. Y la reforma en cierto sentido lo logra, al reencauzar el proceso político e incorporar al sistema electoral a nuevos partidos y al darles representación parlamentaria.

En 1981 y 1982 la crisis se agrava y el gobierno tiene que suspender el servicio de la deuda externa. Y como al final del sexenio anterior su prestigio cae también en unos cuantos días, debido a la crisis, la devaluación del peso y el descontento popular y, paradójicamente, el de quienes se habían beneficiado de la petrolización y del alto crecimiento de la economía: poderosos grupos empresariales y capas medias acomodadas, que en el ojo del huracán de la crisis, sobre todo en 1983 viven quiebras en cadena de miles de empresas y ven caer verticalmente sus ganancias e ingresos. El gobierno focaliza a los banqueros como responsables de la crisis financiera y quienes deben de pagar los platos rotos, con la nacionalización de la banca. Las contradicciones interburguesas agravadas hacen evidente que la crisis en el país no era meramente económica.

La crisis política se profundiza en esos años. El movimiento obrero al margen del control oficial retoma la iniciativa en importantes luchas por la independencia sindical y de carácter salarial, principalmente en las empresas monopolistas, muchas de ellas transnacionales. Pero la crisis política expresada en la imposibilidad del aparato del Estado de mantener el control casi total de los acontecimientos sociopolíticos, se hace evidente en los hechos sociales que rodean a los devastadores sismos en la ciudad de México, en septiembre de 1985.

El gobierno, con una sorprendente y a la vez desconcertante incapacidad para enfrentar la catástrofe, es pronto rebasado por la gente, que asume el control y el rescate de la ciudad. La solidaridad popular dará cuenta de que para enfrentar sus graves problemas el ciudadano común no requiere más de ese gobierno, y tal vez muchos acarician la idea de que éste pueda forjar uno distinto.

La crisis va a ser el marco en el que se agudizan las contradicciones político-ideológicas en los diversos ámbitos de la sociedad y en el aparato del Estado. En el PRI se agravan las discrepancias y surge la llamada Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Las posiciones de esta fuerza democratizadora confrontan la línea política que domina entonces en el gobierno y que cuenta con el apoyo y la complacencia de la clase en el poder y de diversos grupos de priístas y de otros partidos como es el caso del PAN. Al no aceptar el régimen la crítica a su política antipopular y desnacionalizadora y al cerrársele los espacios políticos, la Corriente Democrática produce el más importante cisma en las cuatro décadas de vida del PRI. Esta escisión no sólo fractura al partido oficial, sino que lo despoja de la corriente progresista más congruente y abre nuevas y más amplias posibilidades de enfrentar en otros escenarios políticos la línea neoliberal que domina ya en el Estado. Y es, sin duda, en 1988 cuando la crisis del sistema político mexicano alcanza un punto culminante, se vuelve crónica, e inicia la evidente declinación del viejo y anquilosado sistema

electoral en un proceso de descomposición plagado de crecientes contradicciones.

La candidatura a la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas y el amplio movimiento popular que lo apoya, constituyen los elementos clave de una nueva correlación de fuerzas que habrá de preocupar seriamente a quienes ejercen el poder en nuestro país.

Pero a pesar de que esa candidatura cobra fuerza con rapidez, lo cierto es que no sólo se le menosprecia en medios oficiales, sino que los propios grupos progresistas no se percatan de lo que ocurre, ni de las posibilidades de avance que ofrece la nueva situación. El Partido Mexicano Socialista, por ejemplo, se mueve por su lado con otra candidatura, y es ya en vísperas de las elecciones cuando, convencido de que su campaña no tiene perspectivas, decide apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas.

El gobierno, por su parte, que llega a los comicios con una posición triunfalista, apenas iniciado el cómputo de los votos se da cuenta de que Cárdenas va adelante y de que el partido oficial puede perder; y aunque hasta ese momento se había hecho gala de que el control electrónico del proceso entrañaba un gran progreso y garantizaba la limpieza de las elecciones, el nuevo y moderno sistema “se cae”, o sea, deja de funcionar, y como siempre, la imposición se ingenia para que los sufragios en favor de Cárdenas disminuyan, y los del candidato oficial aumenten.

La mayoría de los ciudadanos no sabe de electrónica; pero comprende que la corrección que se haría de los votos no expresa su voluntad ni lo que realmente ha sucedido. Es más bien una maniobra, una manipulación poselectoral, y para muchos mexicanos, un fraude que denuncian y rechazan de diversas maneras.

Y si bien afloran serias desavenencias en la Cámara de Diputados y en otras instancias del Estado, el extendido descontento que pudo haber derivado en un estallido social violento de serias consecuencias para la nación, por los bajos niveles de organización no encuentra cauce y desfogue. Y el cardenismo, consciente de que acechaban graves consecuencias políticas y sociales para la gente, hace un serio esfuerzo para atemperar el enojo acumulado por la burla a la soberanía popular.

Ahora, además, el desacuerdo con la línea oficial se expresará no solamente por medio de un descontento generalizado, sino que mucha gente decide organizarse y desplegar a partir de entonces una lucha política en nuevos y diversos frentes y ámbitos, ya sea a través de múltiples organizaciones sociales o a través del partido al que convoca Cárdenas a construir: el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Visto en perspectiva histórica, a partir de entonces la suerte de los gobiernos emanados del PRI está echada. Particularmente por el hecho de que han acentuado su carácter antidemocrático, y porque en esos gobiernos, que cubren las décadas de los ochenta y noventa, el grupo hegemónico va a ser un segmento de altos funcionarios estrechamente vinculados con los intereses de viejos y nuevos empresarios escandalosamente enriquecidos, y, como ahora se ha hecho evidente, al menos en el caso de los ex presidentes Salinas y Zedillo, con importantes intereses transnacionales de grandes corporaciones, sobre todo estadounidenses.

Paulatino derrumbe del partido oficial

La lucha del movimiento democrático cardenista cobra impulso a partir de entonces, pese a la política represiva de los sucesivos gobiernos neoliberales, especialmente el de Carlos Salinas de Gortari. Con la disposición de lucha del cardenismo y el contradictorio avance de la crisis política, se abre el escenario de un largo y difícil proceso de democratización de más de una década, frente a los gobiernos a los que ese movimiento y otras fuerzas sociales y políticas de los más diferentes ámbitos ubican como antidemocráticos, desnacionalizadores, entreaguistas y hostiles a las causas populares.

En adelante el partido oficial no podrá triunfar en todas las elecciones. Perderá cada vez más gobernaturas, empezando por la de Baja California; presidencias municipales importantes, como las de Chihuahua en 1983, que tienen el notable antecedente en la de Juchitán, Oaxaca; senadurías; diputaciones, y en el año 2000, la Presidencia de la República.

No obstante, como expresión del hecho de que las crisis en el ámbito social no se desarrollan de manera lineal sino a través de contradicciones cuyo futuro no es predecible, la crisis política en el salinato se manifiesta en parte como un momento de recomposición del consenso a favor del gobierno.

La política económica y social del régimen recibe durante ese sexenio un respaldo casi total de los grupos económicos dominantes, aunque desde un principio se van a expresar discrepancias de distintos grupos del PRI que acusan al nuevo gobierno de no ser genuinamente priísta. No obstante, a lo largo del sexenio salinista, franjas importantes de la población son ganadas a las posiciones políticas e ideológicas gubernamentales.

La prosperidad de los grandes negocios en marcha, que según el gobierno permitiría al país transitar a mediano plazo al primer mundo, gana y confunde a amplios segmentos sociales. La construcción ideológica salinista no carece de sustento en la realidad, deriva en gran medida de los éxitos en los negocios

de muchos de los grandes capitalistas y aun de no pocos pequeños y medianos. De ahí que su fuerza principal haya crecido entre los grandes y medianos empresarios y aun segmentos de las capas medias, apoyada esa recomposición del consenso, por el grueso de la prensa y la mayoría de los periodistas sobre todo de radio y televisión.

Con esa base social y con el objetivo de ampliarla, se pone en marcha una línea política ambigua de acercamiento a ciertas agrupaciones sociales a través de programas asistenciales de solidaridad para pobres por un lado, y por otro, una política de enfrentamiento y exclusión antidemocrática hacia el movimiento popular menos domesticable y particularmente el cardenista. Esa línea política habrá de contar con el apoyo principal de los beneficiados de esa estrategia de desarrollo, o sea, los grandes consorcios monopolistas nacionales, grupos importantes de la burguesía y algunos intereses imperialistas en México y en los Estados Unidos.

Los medios de información y todo el aparato ideológico del régimen, incluidos desde luego el partido oficial y los partidos afines, en primer lugar el PAN –que se ve altamente beneficiado con un decidido apoyo gubernamental en las famosas concertaciones– así como las organizaciones empresariales, podría decirse, se llenan de salinismo.

El PRI y el PAN, los organismos empresariales y los medios de comunicación, aceptan y apoyan acriticamente, entre otras cuestiones: las turbias privatizaciones salinistas de las empresas públicas incluidas algunas estratégicas, la apertura económica indiscriminada hacia el exterior, la política de sobrevaluación del peso, el apoyo discreto y discrecional a la banca comercial reprivatizada y a los grandes grupos monopolistas, los topes salariales y la contrarreforma agraria, así como los actos de autoritarismo y represión, y una política clientelar caritativa que pretende suplantar las aspiraciones de justicia social.

A lo largo de aquel sexenio se realizan tres reformas políticas –meramente electorales–, concertadas entre el PRI y el PAN: la hecha en dos momentos en 1989 y 1990, en la que primero se crea el Instituto Federal Electoral (IFE) y poco tiempo después el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe); la de septiembre de 1993 que amplió el Senado mediante la elección de tres senadores por entidad federativa, eliminó la cláusula de gobernabilidad en la Cámara de Diputados e introdujo otros cambios; y, la de 1994, en el marco del levantamiento zapatista, en la que se “ciudadaniza” el Consejo General del IFE, los observadores nacionales obtienen la facultad de cubrir todas las etapas del proceso electoral y se crea la Fiscalía Especial para Delitos Electorales.

Paralelamente a las coincidencias en las reformas electorales entre el PRI y el PAN, se irán tejendo los acuerdos en torno a las posiciones salinistas en los

asuntos económicos, sociales y políticos más importantes, se forja así la tácita alianza política electoral de ambos partidos para derrotar al cardenismo. Y en las elecciones de 1994, en un ambiente político turbio, entreverados los asesinatos del candidato oficial Luis Donaldo Colosio y del presidente del partido gobernante Francisco Ruiz Massieu, el salinismo triunfa en toda la línea, al adjudicarse entre el PRI y el PAN las tres cuartas partes de la votación total nacional.

Cabría aquí recordar que el asesinato del candidato del PRI Luis Donaldo Colosio consterna al país. El clima político en el que se produce, revela ciertas contradicciones en el gobierno y el partido oficial, lo que hace pensar que se trata de un asesinato de Estado. No obstante, desde entonces se reitera que el crimen fue cometido por una persona aislada, y que no hubo autores intelectuales que por razones políticas, tomaran parte en él. Con todo, el lustre del salinato empieza a opacarse y la ulterior designación de Ernesto Zedillo como sucesor –conforme el viejo y antidemocrático método que el pueblo conoce como el dedazo– no atempera sino que agrava el descrédito del gobierno de Carlos Salinas.

Poco antes, a punto de concluir el salinato –cuando salvo el cardenismo y otras fuerzas políticas sin gran peso en los medios informativos, constituyen la oposición visible– se produce uno de los hechos más importantes de la segunda mitad del siglo XX: el levantamiento indígena zapatista en Chiapas. El estallido, al nivel de un enfrentamiento armado con el gobierno de una organización de indígenas del estado de Chiapas denominada Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), no sólo da cuenta de la persistente crisis política que según el salinismo había sido resuelta, sino de su agravamiento.

Las demandas del EZLN relativas a las condiciones de pobreza, explotación y despojo de que son objeto los indígenas despiertan creciente simpatía y apoyo. Y a las explicables causas y demandas de carácter económico se suman aspectos sociales como los problemas de la mujer, culturales como la defensa y reconocimiento de usos y costumbres indígenas, y la necesidad de reconocer a los pueblos indios como parte de la nación, y políticos como la exigencia de una democracia genuina, de su derecho a la autonomía y a nuevas y más justas formas de integración a la vida nacional y una paz con dignidad y justicia.

Dicho levantamiento atrae rápidamente la atención política del país. Y a pesar de que se le niega la dimensión de ser en sí mismo un hecho grave y a la vez expresión del no resuelto problema nacional indígena, quienes ejercen el poder intentan en diversos momentos y de formas diferentes, enfrentarlo principalmente con una fallida política de aislamiento y acciones policiaco-militares. Y es tal vez por ello y por la incapacidad de superar sus limitantes antidemocráticas y sus viejas prácticas, que el gobierno no logra resolver el conflicto ni en el salinato ni en todo el sexenio zedillista posterior.

La lucha indígena impresiona en México y en muchos países del mundo por su justeza. El régimen no atina a darle solución al conflicto, tal vez porque lo que está en juego son los legítimos derechos indígenas, expresión de viejas y cada día más graves desigualdades en todo el país. Y porque, además, la desigualdad como problema principal de la sociedad mexicana exige una seria transformación económica, social y política nacional, a la que los gobiernos poscardenistas se han opuesto.

El gobierno de Ernesto Zedillo, a pesar de que inicia con una herencia salinista sumamente negativa, con un par de impactantes magnicidios como crímenes de Estado no resueltos y con el estallido de una crisis económica sin precedente en décadas, persiste en las líneas políticas centrales que sustentaron los dos gobiernos anteriores. Y las cosas no sólo no cambian positivamente, sino que los problemas sociales y políticos se agravan. El descrédito del salinismo, al que se suman ahora ciertos segmentos sociales que poco antes lo habían apoyado, apuntalado por la descomposición política del régimen y por los efectos devastadores, para el grueso de la población, del agravamiento de la crisis económica y social, crearán nuevas y complejas condiciones políticas en 1995, 1996 y 1997.

Ahora las condiciones para preservar la hegemonía absoluta del PRI en diferentes estados de la República se vuelven cada día más difíciles. El partido oficial pierde crecientemente terreno electoral, hasta que en 1997, en la primera elección de jefe de gobierno del Distrito Federal, es prácticamente arrasado por el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, quien consigue la mitad de la votación total de la capital del país.

Cárdenas logra el triunfo en gran medida porque no piensa ni promete resolver los más graves problemas de la ciudad de México, de la noche a la mañana; sin embargo, propone que un primer paso para enfrentar la difícil situación que se ha generado con el paso de los años y de gobiernos que no encararon los problemas sino de múltiples maneras incluso contribuyeron a generarlos, estriba en contar con un régimen honrado, democrático y comprometido con la gente. Deja claro asimismo que lo fundamental para avanzar es la participación consciente y unida del propio pueblo, quien tiene que conocer los problemas para intentar resolverlos con el apoyo decidido del gobierno del Distrito Federal. Para ello también plantea enfrentar la corrupción, arbitrariedad, inseguridad, violencia e injusticia.

El triunfo de Cárdenas es fruto de un esfuerzo ciudadano que remonta una persistente campaña desfavorable plagada de tergiversaciones, desinformación y aun calumnias en muchos de los medios paradójicamente llamados de información. Para quienes ejercen el poder representa un hecho inquietante, puesto que

les preocupa el que puedan peligrar sus intereses ante la posibilidad de que el prestigio del nuevo jefe de gobierno, logrado en muchos años de lucha y por la congruencia de sus posiciones democráticas, se nutra ahora desde el gobierno local más importante del país y le permita demostrar a la gente que existen otras maneras de gobernar. Y más aún, que con esa nueva manera de hacer política se abran cauces democráticos de participación ciudadana.

Es sobre todo a partir de la toma de posesión de la jefatura de gobierno que Cárdenas y su equipo habrán de enfrentar, además de los graves problemas de la ciudad acumulados a lo largo del tiempo, los de una campaña que obviamente pretende desprestigiar al primer gobierno democrático electo en la ciudad de México y sembrar la duda y la confusión. Por ejemplo, no acaba de tomar posesión del cargo cuando se inician en los medios las encuestas telefónicas para preguntar a la gente si percibe que los problemas de la ciudad se están resolviendo; cuando se anuncian nuevas medidas para enfrentar la inseguridad, se insiste en hechos de violencia, que a menudo, como se descubrió en su momento, eran actuaciones prefabricadas para la televisión, y a partir de ello se dice que la violencia crece; cuando se actúa contra presuntos criminales, como en el caso del asesinato del conductor de televisión Francisco Stanley, se mueven poderosos intereses que intentan convencer a los televidentes que quien delinque es el gobierno del Distrito Federal al aprehender a “ciudadanos ejemplares”, etcétera.

A través de diversos medios principalmente televisivos y radiofónicos, dicha campaña es orquestada, y de múltiples maneras subvencionada, por distintas fuerzas desde el gobierno y de consuno con éstas, el PAN y el PVE, algunos organismos empresariales y otras organizaciones conservadoras. El objetivo central fue, sin duda, desarticular y confundir al movimiento popular y a la ciudadanía que anhelaba cambios significativos en el rumbo del país.

No obstante, bajo ese ambiente desfavorable para las fuerzas progresistas, lo alcanzado en muy corto tiempo por el nuevo gobierno del Distrito Federal (dos años dirigido por Cuauhtémoc Cárdenas y uno, el último por Rosario Robles), es sin duda importante.

Se inicia en la práctica el combate a la corrupción, empezando por la exigencia de probidad a los altos funcionarios del gobierno (es tal vez la primera administración de la ciudad en medio siglo que no exhibe un escándalo de corrupción y/o enriquecimiento ilícito de ninguno de sus altos funcionarios); se hace un esfuerzo sin precedentes para detener el crecimiento de la delincuencia y la inseguridad, que a lo largo del gobierno de su antecesor Espinosa Villarreal, se había incrementado exponencialmente; se realiza una reorganización administrativa del Distrito Federal y se ponen en marcha diversas importantes obras, como la pavimentación de toda la ciudad después de una década que no se

hacia, o la apertura de nuevas líneas del metro, la realización de varias obras hidráulicas, amén de que se crean nuevas formas de participación y esparcimiento ciudadanos que permitirán una manera diferente de gobernar.

El gobierno del presidente Zedillo, en cambio, aunque había ofrecido bienestar a las familias mexicanas, en la práctica se olvida de su promesa, deja que mucha gente se empobrezca cada vez más, se muestra incapaz de hacer frente al problema de Chiapas y contribuye, con una política represiva y de simulación conciliadora, a que el conflicto siga en pie, sin que se avance en el intento de lograr una paz digna y justa, a partir de un expreso reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indios. Y el que Zedillo reitera que no interviendrá en las decisiones del partido oficial y que deberán ser los órganos de dirección los que decidan lo que procede hacer, en realidad ayuda a que el PRI se debilite, a que se extienda a menudo la confusión, a que se multipliquen y ahonden las discrepancias internas, y a la postre a que el partido oficial sea derrotado, por primera vez, en una elección presidencial. Ocurre todo ello, explicablemente, pues siendo el PRI una organización en que las decisiones más importantes se tomaban por el Presidente de la República en turno o con su directa intervención, al hacerse a un lado el primer mandatario al menos en ocasiones, el mecanismo que realmente funcionaba deja de hacerlo y entonces, lo cierto es que ni los principales dirigentes saben cómo proceder.

En la derrota del partido oficial influyen también, entre otros hechos, el que no obstante la forma en que la política neoliberal en acción lesiona a la mayoría de los mexicanos, el gobierno la mantiene y defiende, y al hacerlo se subordina crecientemente sobre todo a los intereses de Estados Unidos y se ahonda la dependencia, generalizándose entre numerosos ciudadanos la idea de que la política en boga no es ya en realidad la del gobierno, sino la que se proyecta, aprueba e impone principalmente desde Washington.

Quien haya prestado atención a las posiciones de Zedillo en los últimos meses de su gobierno, probablemente advirtió que inclusive era ya más papista que el Papa, y que lejos de adoptar una actitud objetiva, seria y crítica hacia la globalización, se había convertido en un propagandista de ella, lo que quizás contribuyó a que al dejar la presidencia, empresas transnacionales como Procter and Gamble lo invitaran a participar en sus cuerpos de dirección.

El 2000 y los reacomodos en el Estado

Las elecciones presidenciales del año 2000 reflejan una nueva correlación de fuerzas nacionales. El hecho político electoral tal vez más relevante de estos comicios es la primera gran derrota del PRI en sus 55 años de existencia y de triun-

fos ininterrumpidos. La sorpresiva derrota del viejo partido oficial, que logra en la elección presidencial 36.1 por ciento, esto es 6.4 por ciento menos que la llamada Alianza por el Cambio encabezada por el PAN, pasma a los medios políticos nacionales e internacionales.

Dentro del todavía partido oficial, acostumbrado a ganar de todas, todas y a sobrevivir con el abierto apoyo gubernamental, la inesperada derrota produce de momento una suerte de parálisis, seguida de una especie de erupción de desavenencias internas y con el gobierno, particularmente con el presidente Zedillo, que van a revelar serias contradicciones de todo tipo, que en el curso de los meses que preceden a la toma de posesión presidencial de Vicente Fox y aun después, se desarrollan y vuelven más complejas e impredecibles.

Por otro lado, en un ambiente informativo sumamente adverso y otras condiciones desfavorables en las que se realiza la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas –que culmina con resultados electorales de un 16.6 por ciento de la votación nacional–, reflejan una situación muy difícil para las fuerzas agrupadas en la Alianza por México.

La seria y también inesperada derrota fue producto tal vez del impacto sobre ciertas capas de la población de la campaña de desprestigio que por años llevaron a cabo diversos grupos representativos de intereses económicos y políticos muy poderosos, y tal vez derivada del hecho de que algunos de los principales planteos nacionalistas y por un cambio real en el rumbo del país que proponía Cárdenas no lograron convencer al electorado de su vigencia, justeza y viabilidad, y aun fueron presentados por ciertos grupos como ilustrativos de que pretendía regresar al pasado.

Probablemente contribuyeron asimismo a la derrota el que algunas propuestas no fueron claramente establecidas o no resultaran atractivas para los votantes y, sin duda, el que en plena campaña, con frecuencia pesaron más las diferencias entre miembros del PRD, que la decisión de conjugar esfuerzos y unirse para apoyar entusiastamente al candidato a la presidencia. Los problemas internos del PRD fueron, pues, un obstáculo adicional, y el partido no mostró tener la flexibilidad y la capacidad necesarias para atraer a numerosos ciudadanos que aun no simpatizando con los partidos, estaban dispuestos a apoyar a Cárdenas, y lo habrían hecho si a partir del pleno respeto a sus posiciones se despertó su interés y se les gana a participar en cauces amplios y heterogéneos como ciudadanos no organizados.

Las divergencias en el seno del PRD fueron a veces secundarias y aun circunstanciales; pero también revelaron concepciones políticas diferentes no fáciles de conciliar, lo que probablemente no se comprendió oportuna y claramente en el partido, y aun contribuyó a ahondar ciertos desacuerdos. Y el que, a punto

de concluir la campaña se insistiera por los medios y aun por algunos perredistas en que todas las encuestas coincidían en que Cárdenas no tenía posibilidad alguna de triunfo, ayudó también a fortalecer a los defensores del llamado “voto útil”, según quienes si su candidato no podía triunfar, carecería de sentido votar por él, y lo aconsejable era apoyar a Fox y al PAN. Y así lo hicieron.

Y, como el equipo de campaña y el propio candidato lo admitieron en su momento, la poca atención que se dio a los medios de comunicación y a las nuevas y vistosas formas de hacer campaña electoral, muchas de las cuales por cierto, bajo la influencia del democratismo burgués y de una ideología mercantil e individualista son vanas e insustanciales, también jugó un papel negativo.

Por el contrario, Vicente Fox, que encabeza la llamada electoralmente Alianza por el Cambio, contó para su triunfo con un significativo apoyo de 42.5 por ciento de la votación nacional. Su éxito pudo haberse debido, entre otros, a hechos como los siguientes:

- a lo largo de su campaña electoral se irá convirtiendo en el candidato de los grupos más influyentes de la clase en el poder. Su origen empresarial como empleado, accionista y sobre todo funcionario de alto nivel de la Coca-Cola, le permite hacer uso de influencias en el “mundo de los negocios” y entrar en contacto personal, o a través de allegados, con el grueso del empresariado alto y medio y convencer a una buena parte de él de que tomaría sus causas como propias;
- su campaña presidencial la inicia tres años antes de las elecciones y cuenta con el apoyo de grandes sumas de dinero aportadas por empresarios pudientes y varios miles de personas ricas y de clases medias acomodadas principalmente urbanas, que se irán acuerpando en los llamados “amigos de Fox”;
- las personas agrupadas en los “amigos de Fox” proporcionan un importante apoyo propagandístico, logístico y sobre todo en la recaudación de aportes económicos, que sin duda fueron muy cuantiosos puesto que provinieron de grupos empresariales poderosos, de decenas de miles de familias acomodadas y, como se denunció en su momento, del exterior, concretamente de empresas y organizaciones conservadoras de los Estados Unidos;
- el que la bandera del cambio Fox la ostentara como principal y que con ayuda de los medios de información lograra arrebatarla a las fuerzas progresistas y concretamente al cardenismo, además de que el foxismo pudo desprenderse del lenguaje y de la rigidez del panismo tradicional. Y el que, como hoy sucede en gran parte del mundo, este “nuevo” conservadurismo pudo presentar un discurso distinto al tradicional de la derecha, a veces plagado inclusive de planteos que históricamente correspondieron a causas progresistas y concretamente a las de la izquierda;
- el que se erigiera verbalmente en paladín antipriísta y el que recogiera demandas de todo tipo, muchas veces antagónicas e inviábiles y que las convirtiera en

un listado de promesas que impresionó a muchos, así como la habilidad del candidato para decirle a cada auditorio lo que quería oír, sin el recato de ofrecer a unos lo contrario de lo que acababa de decir a otros;

- amén del apoyo decisivo de los medios y de un eficaz manejo mercantil de la campaña que soslaya las incongruencias programáticas y el contrasentido de muchos de sus planteos, y sólo resalta lo circunstancial y lo anecdótico.

Todo ello va a contar con un telón de fondo: el creciente cansancio y rechazo a las prácticas antidemocráticas de más de medio siglo de gobiernos priistas, lo que configurará un escenario político que hace posible la derrota electoral del partido oficial.

Es tal vez determinante en el triunfo del foxismo sobre el PRI, el hecho de que en los tres últimos sexenios de gobiernos neoliberales, el país ha vivido los momentos más severos de una larga crisis. La mayoría de su población padece crecientemente las difíciles condiciones con más desempleo, aumento de la inseguridad y la delincuencia, caída en sus ingresos reales y en sus niveles de vida, descomposición social y discursos diarios sobre una democracia que el ciudadano común no ve realizada ni en su vida material ni en los diversos ámbitos económicos, sociales y políticos en los que se desenvuelve.

El priísmo fue sin duda un artífice principal de su propia derrota política y electoral. Durante los últimos sexenios cobijó y apoyó sin reservas la política de los distintos gobiernos, tanto los llamados populistas como los últimos neoliberales. Apoya, no sin contradicciones, pero a la postre sin cortapisas, las políticas económicas de estos gobiernos. Débiles serán también sus reclamos, acompañados a veces con un silencio cómplice o justificaciones diversas de las devastadoras consecuencias sociales de la política en marcha.

Será mal vista su complicidad con hechos graves, sobre todo en los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo; por ejemplo, con los escándalos financieros y los grandes negocios fraguados alrededor de las turbias privatizaciones de centenares de empresas estatales; la apertura subordinada al exterior y el entreguismo de estos gobiernos; el Fobaproa, el Renave, el disimulo ante la falta de resultados creíbles en las investigaciones de los magnicidios de sus propios dirigentes; el silencio ante las masacres como las de Aguas Blancas, Acteal; la persecución abierta y encubierta del movimiento indígena zapatista y graves violaciones a derechos fundamentales.

Pero lo que tal vez debilita más al PRI ante la oposición de derecha y electoralmente frente al PAN, es que en las dos últimas décadas se hizo más estrecho el acercamiento de los grupos dominantes en ese partido a las posiciones políticas conservadoras, hasta volver al PRI distinguible del PAN, sólo en aspectos

irrelevantes y sin significación para el ciudadano común, lo que no era exactamente así en la realidad, puesto que en aquel partido se siguen moviendo fuerzas populares, algunas de ellas evidentemente no conservadoras, pero en los hechos así resultó.

El grupo –delamadridista, salinista, zedillista– que gobierna durante los últimos tres sexenios, si bien tiene contradicciones internas, coincide y apoya el nuevo tipo de conservadurismo de moda en el mundo de la globalización capitalista. A la postre, esta nueva identidad neoliberal termina por desdibujar al viejo partido oficial como principal preferencia popular para continuar ostentando la estafeta gubernamental.

Existen evidencias de que distintos grupos influyentes en el submundo de los negocios y en diferentes regiones del país, de que quienes ejercen el poder local y/o nacionalmente, se fueron convenciendo de que, para preservar sus privilegios, y además la continuidad del régimen político mexicano, se requería terminar con poco más de medio siglo de triunfos al hilo del PRI, lo que por lo demás ya aconsejaban organizaciones internacionales político financieras y supuestamente humanitarias, así como los círculos políticos conservadores más influyentes de los Estados Unidos.

A la postre una parte significativa de la gente más rica y aun de la oligarquía monopolista mexicana, en rápida recomposición en los últimos lustros, que había apoyado, y a su vez se había apoyado en el PRI desde su surgimiento en 1945, sin recato cambia de preferencia electoral. Lo que confirma que, como sucede hoy en gran parte del mundo capitalista, la burguesía no tiene un partido único sino que se desenvuelve en diversos ámbitos políticos y se apoya en fuerzas partidarias diferentes conforme lo dicten sus intereses.

Algunos rasgos de la nueva situación política

Sin embargo, sería un error pensar que hoy todo es lo mismo, y que el nuevo gobierno sólo representa un simple cambio de personal. Los hechos dan cuenta de que el país se enfrenta a una nueva disposición de fuerzas políticas. Y que, en vez de confirmarse la expectativa de ciertos comentaristas de los medios, que influyen en no pocos ciudadanos, de que los más serios problemas nacionales podrían resolverse a partir de elecciones más creíbles y con el triunfo de un candidato presidencial proveniente de un partido distinto al hasta entonces oficial, ahora, más bien, apenas a poco más de un trimestre de la toma de posesión del nuevo gobierno, la situación pareciera volverse más compleja e incierta.

De hecho vivimos un nuevo momento político, en muchos aspectos muy diferente a lo que hasta aquí se había vivido. El sistema de contradicciones en el plano de la política y concretamente en el aparato del Estado, se ha alterado, y en muchos sentidos a partir de ahora es muy posible que el proceso se vuelva más complejo y dinámico.

Las líneas políticas propuestas por el nuevo gobierno en las distintas instancias económicas y sociales, por sí mismas dan cuenta de esta nueva situación. Sin embargo, a diferencia de quienes pensaron que a partir del 2 de julio del año 2000 las condiciones cambiarían positivamente, la realidad se está encargando de demostrar que nos enfrentamos a nuevos y tal vez más difíciles retos.

Los hechos dan cuenta de que no están en marcha nuevas estrategias que permitan al país hacer frente a los problemas nacionales más importantes. Si bien se aprecian ciertos cambios en la forma de encarar algunos asuntos, hasta hoy no se ha empezado a actuar de manera diferente y conforme a los intereses de la mayoría de la población, buscando en las distintas líneas de acción política gubernamental incorporar de la mejor manera a nuestro país al mundo, preservando la soberanía y persiguiendo en todo momento remontar la cada día mayor profundización de la dependencia.

La subordinación de nuestro país en todos los ámbitos puede agravarse, si el gobierno de Fox cede ante los renovados bríos con los que el nuevo gobierno estadounidense reimpulsa sus propuestas tanto de un acuerdo energético en principio entre los países de América del Norte, y por otro lado la de formar cuanto antes el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y no toma una posición patriótica y latinoamericanista, que le permita impulsar una integración desde el ángulo de los intereses de Nuestra América con equidad y sin exclusiones, como se pretende con Cuba.

Lo que es preocupante es que más bien se insista, ahora con mayor énfasis desde el nuevo gobierno, en las posiciones conservadoras dominantes en la mundialización capitalista en marcha, particularmente las neoliberales que se han impuesto en las políticas de ajuste en los diversos países que padecen mayor subordinación bajo el capitalismo del subdesarrollo. Llama la atención el hecho de que Fox y los principales funcionarios del nuevo gobierno sean tal vez más enfáticos que los últimos gobiernos –caracterizados en gran medida por su entreguismo–, en los llamados al capital transnacional y en su insistencia de que sin esa inversión no podremos avanzar, y en indignos ofrecimientos en el extranjero del país y sus riquezas.

Pero si bien es cierto que conforme las posiciones del nuevo gobierno amenazan que prevalecerán en lo esencial esas líneas, hay sin embargo modificaciones importantes en las posiciones políticas gubernamentales que afectarán la situa-

ción nacional en diferentes ámbitos económicos, sociales y políticos que sería un error no tomar en cuenta, y creer que todos los cambios en marcha son deleznable y no tienen posibilidades de alterar las condiciones del país.

Un hecho político esencial en el nuevo panorama es la composición social del gobierno de Fox. Se dice convencionalmente por parte de algunos intelectuales relacionados de distintas maneras al nuevo régimen, que desde hace algunos años, o, desde el 2 de julio, dicen otros, el país vive una transición a la democracia. Sin embargo, paradójicamente, el nuevo gobierno ha decidido conformarse sobre la base de un equipo que le permite de hecho mantener una sola posición, diríamos excluyente y casi monolítica, en los asuntos centrales del desarrollo.

El gabinete económico, sin duda determinante en las posiciones político-sociales del gobierno, está conformado en gran parte por funcionarios ejecutivos de grandes empresas y algunos empresarios, todos ellos vinculados a ciertas subcorrientes ultraconservadoras y dogmáticas, tienen un perfil ideológico y político definido excluyente de otras fuerzas que se supone debieran participar en un gobierno de transición. Que es por cierto como convencionalmente le llaman algunos funcionarios, legisladores, intelectuales y académicos, al curso de los hechos político-electorales que provoca la caída del rancio partido oficial y el arribo de un nuevo gobierno conservador, y a su ejercicio político.

Tal vez el mensaje del nuevo gobierno sea el de que no se trata de una transición política democrática, sino de la radicalización de una estrategia anti-popular que ya estaba en marcha. Más aún si el propósito central estriba en preservar la línea político-social que agrava y profundiza la histórica desigualdad en nuestro país.

El hecho no es menor, puesto que la definición ideológica del gabinete presidencial pareciera haber suscitado ciertas desavenencias entre distintas fuerzas representativas de grupos políticamente poderosos. Muy posiblemente seguirá provocando discrepancias y nuevas e impredecibles luchas políticas entre quienes están arriba, pero también de distintos sectores de la población que será afectada por los ajustes ultraconservadores propuestos a la estrategia de desarrollo y por aquellas contradicciones.

A propósito de las divergencias que se exhiben ahora con mayor frecuencia entre distintas fuerzas poderosas económica y políticamente, tal vez sigan dominando el panorama político como sucede desde hace mucho tiempo y, pueden también seguir condicionando aspectos importantes de las luchas sociales. Y algunos elementos están siendo arrastrados a conflictos con otros segmentos sociales, con los que más bien debieran buscarse hoy posibles puntos de acuerdo en la defensa de intereses comunes.

En ese sentido habría que tomar en cuenta que ciertas fuerzas políticas excluidas, no de los círculos en donde se toman las decisiones fundamentales porque ahí estarán la mayoría de los que por años han estado, sino de esferas gubernamentales y otros ámbitos del aparato del Estado como empresas estatales, el Poder Legislativo y el Judicial, centrales obreras, innumerables cuerpos y puestos en las secretarías de Estado, etcétera, empezando por importantes segmentos del que fue el partido oficial, no sólo habrán de resentir el no tener espacios políticos para negociar sus posiciones, sino el haber quedado al margen de los beneficios con los que contaron toda su vida, muchos de ellos con base no en influencias sino en un trabajo, experiencia y esfuerzo propio.

Las contradicciones provocadas por los reacomodos en el aparato del Estado afloran naturalmente entre el PRI y otros pequeños partidos desplazados y el gobierno y el PAN. El que fuera el partido oficial cuenta todavía en la mayoría de los gobiernos de los estados de la República y con un gran peso en el aparato legislativo, particularmente en la Cámara de Senadores en donde es amplia mayoría. Esa fuerza política la esgrimirá como palanca que le permita no sólo sobrevivir sino ampliar su base social y política. Aunque desde otra perspectiva hay quienes plantean la desaparición del PRI y la construcción con lo que reste de sus recursos, de un nuevo y diferente partido, lo que genera dudas en no pocos priístas, puesto que se pueden perder los cuantiosos recursos económicos con los que todavía hoy cuenta esa organización.

En ese ámbito surgen ahora las reivindicaciones "federalistas", que enfrentan al gobierno federal con algunos estados de la República por asuntos político-electorales. Y desde luego los enfrentamientos parlamentarios que pueden culminar con un tijereteo de las principales iniciativas del gobierno, hasta volver irreconocibles las contrarreformas que intenta ahora llevar adelante en los terrenos fiscal, de impuestos, laboral, y, otras económicas y sociales diversas.

Otro problema fundamental para el proceso político en el país es sin duda el conflicto indígena, puesto en el primer plano por la lucha digna y dignificante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El nuevo gobierno, a diferencia de sus antecesores, desde el primer momento dio la impresión de estar dispuesto a crear las condiciones para la negociación política del conflicto. De hecho, desde su toma de posesión inicia el desmantelamiento de la primera base militar de las siete que pide el EZLN.

Vicente Fox declara, desde los primeros días de su gobierno, que va a cumplir de inmediato las tres señales que piden los zapatistas para reiniciar el diálogo, esto es: el aludido desmantelamiento de siete bases militares de más de 250 que hoy tiene el gobierno en el estado de Chiapas; la liberación de los presos zapatistas, y la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, con base en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996.

Sin embargo, la línea política que parece haber adoptado el gobierno ante el conflicto, si bien hasta el momento parece más amplia y, obligado por las circunstancias en que asume el Ejecutivo, coyunturalmente menos represiva que la de los dos gobiernos anteriores, el que esté condicionada por el interés principal en ganar a la llamada opinión pública a sus posiciones, y el hecho evidente de la presencia y agudización de serias discrepancias en el seno del gobierno, de los partidos y entre las fuerzas sociales dominantes, puede afrontar más adelante una situación difícil en la que no se puedan destrabar ciertas contradicciones que obstaculizan la resolución del conflicto. En medio de esa situación, sin embargo, el movimiento indígena pudiera avanzar en su lucha y en la consecución de sus demandas, o vivir una nueva situación desfavorable dependiendo del curso de los hechos.

Al marchar hacia la capital del país, el zapatismo generó un gran movimiento social de apoyo a las demandas indígenas, y ha logrado consolidar y ampliar el apoyo de la mayoría de los pueblos indios en la lucha por sus demandas. Este hecho, por la evidente elevación de los niveles de conciencia que en sí mismo implica, representa para nuestro pueblo un importante avance en las condiciones políticas en que libra sus luchas. Sin embargo, las condiciones favorables sólo podrán consolidarse y avanzar en la medida en que se traduzca en el refuerzo de sus organizaciones actuales, en nuevas formas de organización de aquella gente que está cobrando conciencia y en el despliegue de maneras diferentes y nuevas de hacer política.

El manejo político del conflicto por parte de diversas fuerzas gubernamentales y del aparato legislativo exhibe obvios prejuicios y no parece tomar en cuenta la historia de esa lucha y el amplio apoyo popular demostrado a las posiciones del EZLN. En el Congreso de la Unión algunos diputados y senadores del PRI pero sobre todo la absoluta mayoría del PAN, han adoptado posiciones burocráticas cerradas para minimizar la lucha indígena encabezada por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI), y algunos prominentes panistas han mostrado un racismo trasnochado, pero peligroso. Aunque la ley respectiva que muy probablemente promulgará el Congreso de la Unión, puede modificar la situación, ya sea agravando los problemas o atemperándolos.

Si se aprueba conforme a la esencia de los acuerdos de San Andrés provocará discrepancias en el gobierno, entre éste y segmentos del PRI y del PAN así como con grupos nacionales y regionales pudientes y caciquiles. Y si, por el contrario, la reforma se realiza al margen de los reclamos que la mayoría de los pueblos indígenas han hecho suyos, el asunto no se resolverá e inclusive puede complicarse. Y desde luego lo fundamental en un país como el nuestro, que no se caracteriza por el respeto irrestricto a la Constitución Política, va a ser la lucha

del movimiento indígena que tendrá que, a pesar de su diversidad, avanzar en la unidad para exigir sus derechos como una fuerza social de carácter nacional y la que cada pueblo indígena tendrá que librar para la correcta aplicación regional de la ley indígena conforme a sus legítimos intereses.

Otros problemas no menores están en puerta y esperan respuestas políticas claras, o al menos definiciones iniciales que den cuenta de que se trata no de una convencional sino verdadera transición política. Por ejemplo, la llamada y propuesta reforma del Estado está anunciada pero no en marcha y el régimen político actual se sigue sustentando y reproduciendo conforme a las mismas reglas institucionales, antipopulares y antidemocráticas, sobrevivientes de las contrarformas avilacamachistas y alemanistas de hace medio siglo.

Tampoco está clara la reforma económica prometida por el nuevo gobierno a los empresarios más prominentes, a las organizaciones empresariales y a los inversionistas extranjeros. Lo que produce una situación incierta en la que las medidas aisladas que se pretenden aplicar en política económica, en el presupuesto, en lo fiscal, o las propuestas financieras, así como en lo laboral y otros asuntos sociales de primer orden aparecen desarticuladas –posiblemente para ocultar su proyección–, lo que no resuelve, sino sólo pospone el estallido de conflictos políticos y sociales en curso.

La participación de la ciudadanía en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo sobre la base de sugerencias por correo, como ya lo habían hecho Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, no la hará ni más democrática ni diferente a la política de desarrollo que el gobierno, con base en su composición social ha delineado desde la campaña presidencial y a través de sus primeras medidas. Como tampoco la revisión de la Constitución propuesta habrá de resolverse sobre la base de la consulta que el gobierno dice haber iniciado sino a través de una discusión y lucha política serias.

Otro asunto de gran importancia es la reforma judicial. La impartición de justicia es en nuestro país un reclamo principal que se vuelve impostergable. La gente se queja, con razón, de que la impunidad, la corrupción, la delincuencia organizada, el narcotráfico, la complicidad de algunos elementos y altos mandos de las policías, del ejército y de funcionarios gubernamentales, la violencia y la descomposición social, no son hechos aislados, sino parte ya de la vida cotidiana.

Esta situación que corroe el tejido social, es ya grave y entraña una situación que puede volverse explosiva. Éste es tal vez un problema político toral al que no sólo el Ejecutivo federal sino el Legislativo tendrá que hacer frente, para revertir el anacronismo jurídico y judicial del país, y todo el sistema de imparti-

ción de justicia cuya limpieza debe ser a fondo. Exige también la participación de todas las instituciones del Estado, y desde luego del pueblo, de sus organizaciones sindicales, gremiales, sectoriales, regionales y aun religiosas, de jóvenes, de mujeres, en fin es una lucha que habrá de organizar y librar la gente, y en la que como en otros problemas nacionales no deben esperarse soluciones de arriba.

En éstos y otros asuntos llama la atención el que los consensos se pretenden ir forjando sobre la marcha, lo que si bien puede poner a prueba la habilidad política del nuevo gobierno, también puede provocar empantanamiento en el Congreso de la Unión por falta de acuerdos, o, la negociación, al viejo estilo, de muy serios asuntos para el país entre las más importantes fuerzas políticas partidarias. Con lo cual la llamada transición política se proyectaría en una dirección en muchos aspectos no democrática, que pareciera dominar el proceso político en marcha.

La vida política nacional se ha vuelto más dinámica y compleja, pero debido a la crisis política que desde hace algunos lustros vive nuestro país se expresa también en la de los partidos tradicionales. Dicha crisis se agrava a partir de las elecciones de julio de 2000, y en nuestros días se hace evidente a diario y en prácticamente todos los asuntos políticos.

Por ejemplo, esa crisis en el PRD es grave y en cierto sentido aun desintegradora, y algunos partidos pequeños han perdido ya el registro y, por tanto, la subvención oficial que el Estado les otorga. El PRD vive una situación muy difícil, por las serias derrotas electorales nacional y locales que provocan el primer retroceso de su historia de una docena de años. Como ya se dijo, tal vez influyen de manera importante en los reveses electorales sufridos en el año 2000, las discrepancias que de tiempo atrás se exhiben entre algunas corrientes que ocupan puestos importantes y que expresan posiciones políticas y prácticas diferentes; además del hecho de que prevalecen bajos niveles de organización en numerosos estados del país, y que en algunos de ellos se esté viviendo cierto alejamiento con movimientos sociales diversos; que el trabajo de formación y de forja programática así como la consideración y discusión de asuntos políticos fundamentales y de interés común, sean todavía débiles, y el que algunas fuerzas populares no encuentran en las posiciones de ese partido un tratamiento articulado y penetrante acerca de los grandes problemas nacionales.

En el PRI se están también enconando las discrepancias, puesto que de ser el partido dominante y haber dispuesto desde siempre del apoyo oficial, de ser además por lo mismo, un gran polo de atracción de diversas fuerzas sociales, ahora tendrá que aprender a negociar todo ya no como la parte determinan-

te. Este hecho le está restando apoyo social y provoca el alejamiento de muchos de sus militantes, que buscan unos, como buenos arribistas profesionales, sumarse al nuevo partido del gobierno; otros pretenden vincularse a distintas fuerzas progresistas y muchos más que habrán de integrarse en mayor medida a las organizaciones sociales de donde provienen, amén de quienes empiezan a refugiarse depresivamente en la vida personal.

Pero la muestra más palpable de que estamos frente a una profunda crisis política que tiene entre sus manifestaciones evidentes la de los partidos, son las contradicciones que ahora se advierten en el PAN. La lucha entre conservadores moderados, conservadores tradicionalistas y ultraconservadores fascistoides, sería menos importante si no estuviera incidiendo en la vida política nacional. Esas confrontaciones no son de ninguna manera decisivas, ni significan discrepancias inzanjables que afecten la toma de acuerdos en asuntos fundamentales del país, ante los que la derecha actuará casi seguramente unida.

Pero en los asuntos que se expresan no sólo en el interior del PAN, sino entre ciertas subcorrientes y el propio Presidente de la República, en las cámaras legislativas y en diversos conflictos políticos sociales, no dejan de haber desavenencias que sería un error menospreciar, como ha quedado en evidencia en el problema indígena y la presencia del EZLN en la ciudad de México.

Para mucha gente los partidos no representan un cauce aceptable de participación social y política. Sin embargo, existe un interés creciente por participar de diversas formas en la solución de distintos problemas locales, sectoriales y nacionales. Tal vez por ello ha crecido exponencialmente en los últimos años el número de organizaciones llamadas no gubernamentales. Los ámbitos en los que mayoritariamente se mueven son los de la ayuda y gestoría para atender ciertas necesidades sociales no cubiertas de educación, alimentación, salud, vivienda y otras que el Estado desatiende cada vez más; o como las dedicadas a la promoción de la democracia o a la defensa de los derechos humanos, los de la mujer, de los niños de la calle, de jóvenes, protección del medio ambiente y de los animales; o las que se dedican en el campo y la ciudad a la organización de proyectos productivos, de ahorro, comercialización, etcétera.

En algunas de estas organizaciones no gubernamentales es común cierto menosprecio a lo que hacen otros, particularmente las organizaciones políticas y los partidos. Un problema que padecen no pocas de las llamadas ONG es que carecen de independencia y suelen vivir del financiamiento de organizaciones de ciertos países capitalistas desarrollados, algunas de las cuales tienen tal vez motivaciones altruistas, pero otras más bien parecen impulsar la penetración de intereses extranjeros. Lo que hace que muchas de esas organizaciones, lejos de con-

tribuir al desarrollo independiente de México y ser capaces de defender la soberanía en un momento dado, la ponen en peligro.

Los medios de comunicación particularmente los televisivos han cobrado en la vida política y en los procesos electorales un papel y poder inusitados. Su contenido y orientación no enfrenta regulación alguna, y los grupos concesionarios se oponen a ello con el argumento de que no debe existir la censura, en lo que no dejan de tener razón, pero no se trata de que se impongan restricciones de ese tipo sino de replantear su papel educativo y de instrumento informativo social. Y esto es indispensable porque en el plano político y social las posiciones que promueven tienden a concordar con las de sus dueños, que por lo general suelen ser grupos acaudalados con intereses económicos y políticos, a menudo relacionados con otros grupos de poder, por lo que frecuentemente pretenden atraer a la gente a sus posiciones, y en no pocos casos más que informar lo que realmente sucede en el país y en el mundo, difunden una especie de subcultura superficial, ideología y propaganda políticas.

La libertad de prensa en nuestro país cuesta mucho dinero y la gente, sus problemas y sus puntos de vista suelen encontrar espacios limitados en los medios. Es importante evitar que esto siga sucediendo, y abrir más espacios a la sociedad, al movimiento obrero, al campesinado, a los pueblos indios, a los trabajadores en las más diversas actividades, empezando por los de los propios medios, a los estudiantes y el resto de los jóvenes, a intelectuales y profesionistas independientes, a las amas de casa y las organizaciones de mujeres, a los pequeños y medianos productores y otras fuerzas sociales. Y que se realice una verdadera consulta nacional en la que participe la gente para replantear el contenido y la orientación de estos medios, y hacer valer en los hechos el precepto constitucional de que no son bienes privados sino de la nación.

Desde el ángulo de los intereses de nuestro pueblo, la situación política presenta una perspectiva ambigua. Por un lado se ha tornado más desfavorable y la crisis política tenderá a profundizarse y habrá de afectar en muchos sentidos la vida de la gente. Pero por otro, la nueva situación pareciera estar generando no solamente preocupación en diversos segmentos de la población, sino la necesidad de hacer algo. Y es posible que no poca gente empiece a plantearse que solos y aislados no podremos enfrentar los nuevos retos que nos plantea el proceso político en marcha y que haciendo las cosas de la misma manera como se hacen en la política dominante, en el gobierno, los partidos tradicionales, las organizaciones empresariales y en otros ámbitos políticos, no iremos muy lejos.

Más bien hay que crear nuevas e imaginativas formas de hacer política que nos permitan avanzar en las luchas que habrá de desplegar nuestro pueblo a partir de ahora.